

**RESUMEN Y PROSPECTIVA**

- **Huracán Otis: atención inadecuada detonará riesgos criminales y de conflictividad social** (p. 3). El huracán Otis tocó tierra en Acapulco, Guerrero, la madrugada del 25 de octubre, ocasionando severos daños en construcciones e infraestructura, así como pérdidas humanas y materiales (el saldo preliminar es de 39 muertos). A pesar de que no se esperaba que el huracán alcanzara categoría 5 —ningún modelo logró predecir correctamente la intensificación—, es innegable que las medidas preventivas implementadas y la respuesta de autoridades fueron irresponsables e inadecuadas: durante más de cuatro días (miércoles a sábado), acapulquenses estuvieron incomunicados, sin acceso a servicios básicos y en una situación de alto riesgo. No obstante, en las próximas semanas y meses, se vislumbran severos retos que serán difíciles de superar y que podrían sumergir aún más al municipio en una severa crisis social y criminal.
- **Ejecutan a secretario de seguridad pública municipal junto con operador y 11 policías en Coyuca de Benítez, Guerrero; la inseguridad en este municipio y el estado es cada vez mayor.** (p. 6). El pasado 23 de octubre fueron asesinados en una emboscada en Coyuca de Benítez 13 policías, incluyendo al secretario de seguridad pública municipal y el director de la Policía Preventiva. Este evento se añade a una larga lista de atentados contra secretarios de seguridad del municipio desde la llegada del alcalde morenista Ossiel Pacheco Salas en 2021. El aumento de la violencia municipal está enmarcado en el contexto de inseguridad estatal y en las disputas territoriales entre grupos criminales, en particular el conflicto entre Los Tlacos y Los Ardillos en Chilpancingo, y el avance de La Nueva Familia Michoacana en toda la Costa Grande de Guerrero y en el noroeste del estado. Con el desastre causado por el huracán "Otis", es posible que la dinámica criminal cambie: el escenario más probable es que La Nueva Familia Michoacana aproveche la situación para consolidar su poder en la región, probablemente mediante la entrega de víveres y despensas para construir bases sociales en la región.
- **Cártel de Sinaloa (CDS) exhibe colusión de policías de Jalisco con Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para frenar su avance en Los Altos** (p. 8). Esta semana fueron repartidos en el municipio de Lagos de Moreno unos volantes atribuidos al CDS. En ellos se compartió una lista con los nombres de los policías que están en la nómina del CJNG; el CDS cuestionó la estrategia de las fuerzas de seguridad estatal centrada en detener su avance territorial para favorecer a sus principales rivales. Los mensajes del CDS, de ser ciertos, evidencian el uso discrecional de la aplicación de la ley desde el gobierno estatal

a favor del CJNG. En el contexto de las elecciones de 2024, la presencia creciente del CDS en Jalisco podría convertirse en un factor desestabilizador en la delicada relación entre el CJNG y el gobierno estatal, pues el CDS también buscará cooptar a las nuevas autoridades para competir por la hegemonía criminal en Jalisco.

- **Nueva alianza entre Los González y Los Tepeacas incrementa la violencia en Puebla tras la disputa con “La Barredora” del CJNG** (p. 10). El 23 de octubre un comando armado atacó un picadero en la junta auxiliar de San Miguel Canoa. Siete personas murieron; una resultó herida. Medios publicaron que pudo ser una represalia de “Los González” por la ejecución de tres personas en Amozoc. El 25 de octubre se encontraron bolsas con restos humanos en Chachapa, Amozoc, con mensajes presuntamente firmados por Los González y Los Tepeacas. Autoridades expresaron que la violencia deriva del aumento del narcomenudeo en el área metropolitana, y que tenían conocimiento de este picadero desde hace siete años. El que varias administraciones no hayan terminado con la criminalidad en un solo inmueble, y que continúen responsabilizando a sus antecesores o a la población, indica su probable colusión con los grupos criminales. De ahí que sea poco probable que el crimen organizado disminuya en el corto plazo. Mientras, el temor entre la población, incluyendo comerciantes e inversionistas, se incrementará. Durante este mes, Puebla se ubica como la quinta entidad con más homicidios, según el reporte diario de la SSPC del gobierno federal.
- **Detienen a ahijada del fiscal general de Quintana Roo, líder de los Chiapanecos, con cocaína en Polanco** (p. 13). Con la detención de Carmen Fabiola Pérez, ahijada del actual fiscal general de Quintana Roo, se confirma una red criminal de narcomenudeo desplegada en varios puntos del sur del territorio dedicada a la distribución de cocaína. El fiscal de Quintana Roo, y antiguo fiscal de Chiapas, ha ocupado varios puestos públicos en años recientes y ha sido acusado de liderar una agrupación de narcotráfico conocida como Los Chiapanecos. De este modo, destacamos una operación familiar fuertemente coludida con autoridades gubernamentales que probablemente generará críticas a la gobernadora Mara Lezama por su designación en la fiscalía.
- **Uno de cada dos policías ejecutados en México es municipal y cuatro de cada 10 policías heridos son estatales, mientras que uno de cada tres policías ejecutados o heridos es de Guanajuato, Michoacán o Guerrero** (p. 14). Lantia Intelligence presenta un análisis de los elementos activos de la fuerza de seguridad, tales como militares y policías, que han sido víctimas (homicidios y heridos) del crimen organizado debido a enfrentamientos o agresiones directas. De enero de 2019 a septiembre de 2023 se registraron 2,352 elementos de las fuerzas de seguridad que han víctimas de homicidio (62.5%) y de lesiones (37.5%). De 2012 a 2023, el año con el mayor número de elementos de seguridad víctimas de homicidios y heridos fue 2019 con 693, y aunque se han registrado disminuciones anuales del 3.9% en 2020, 18.1% en 2021, y 24.0% en 2022, se estima que 2023 terminará con un aumento del 50.7% (lo que implica un total de 625 víctimas).

## ANÁLISIS



### Huracán Otis: atención inadecuada detonará riesgos criminales y de conflictividad social

#### RIESGO SOCIAL

Por la noche del 24 y la madrugada del 25 de octubre, aproximadamente a la una de la mañana, el huracán Otis tocó tierra en Acapulco, Guerrero con vientos de hasta 143 nudos (270 km/h), ocasionando severos daños en construcciones y en toda la infraestructura de la zona metropolitana de la ciudad, así como otras pérdidas materiales y humanas (hasta la fecha de elaboración del presente reporte, el gobierno Federal aún manejaba la conservadora cifra de 39 muertos). La rápida intensificación de la tormenta fue un hecho sin precedentes, toda vez que, en un periodo de apenas 12 horas, la tormenta aumentó de la categoría 1 a la 5 en la escala Saffir-Simpson.

- La tormenta fue identificada desde el 22 de octubre, pero sólo se esperaba que ésta fuera una depresión tropical (con vientos menores a 63 km/h), no que se convirtiera en tormenta, mucho menos que se intensificara a una categoría 5.
- Ninguno de los modelos predictivos consiguió anticipar correctamente la trayectoria que seguiría; por ejemplo, el modelo HMON —el que presentó el más intenso escenario— esperaba un máximo de apenas 50 nudos (84 km/h), mientras que el resto de los modelos promediaban vientos con un máximo de 35 nudos (64 km/h); entre otros, CMC, GFS, SHIPS o UKM.

Independientemente del reducido tiempo con el que contaban autoridades para hacer frente a la situación de emergencia, las autoridades de Guerrero y federales fallaron en emitir una alerta y preparar a la población para el impacto del huracán (en medios se mencionó que hubo una alerta preventiva, pero ésta no ha sido confirmada y, en su caso, el alcance que ésta tuvo).

- El único precedente de una intensificación tan veloz fue el huracán Patricia (22 al 24 de octubre de 2015) el que, derivado de condiciones atmosféricas propicias, aumentó a la categoría 5 en un lapso de 10 horas. No obstante, antes de tocar tierra en los municipios de La Huerta y Cihuatlán en la Costa Sur de Jalisco, su intensidad había disminuido por efecto de la Sierra Madre Occidental.
- Si bien el huracán Patricia impactó en una zona considerablemente menos habitada que Acapulco y al tocar tierra tenía menos intensidad, el Gobierno estatal y federal de ese tiempo iniciaron rápidamente acciones preventivas para impedir que el huracán ocasionara pérdidas humanas y materiales significativas. En este sentido, autoridades iniciaron una rápida campaña en toda la zona costera para desalojar a todos sus habitantes y resguardarlos en albergues. Además, siete mil elementos fueron desplega-

dos para resguardar los municipios que fueron afectados por el acercamiento del huracán.

- A manera de comparación, en Guerrero fueron desplegados 8 mil 391 elementos (mil 391 más que en Patricia) del Ejército y Guardia Nacional, 3 mil 107 en la zona centro y 3 mil 648 en la costa.
- No obstante, en 2015 fue posible destinar tantos elementos al auxilio de la población, pues éstos se encontraban desplegados en torno al “Operativo Jalisco”.

Este tipo de desastres naturales —como sismos, tormentas e, inclusive, las enfermedades emergentes como el COVID-19— son coyunturales, cambiantes y difícilmente pueden prevenirse todos sus efectos. No obstante, es innegable que las medidas preventivas y, especialmente la respuesta de autoridades ha sido irresponsable e inadecuada.

- Hasta el domingo 28 de octubre, había incertidumbre acerca de la situación real en Acapulco, pues aún había zonas extensas de su territorio incomunicadas y sin servicio de energía eléctrica.
- Tan sólo en algunas zonas turísticas o de alta plusvalía fue posible identificar desde un inicio la magnitud del desastre (uno de los puntos en los que comenzaron a difundirse videos fue el hotel “Princess Mundo Imperial”). Sin embargo, el resto del municipio permaneció incomunicado por al menos tres días (entre el miércoles y el sábado).
- Además, la entrega de despensas y otros víveres para damnificados no habían llegado (en diversos medios fueron publicadas denuncias acerca del escaso apoyo que habían recibido; en la mayor parte de los casos, nulo).

Es previsible que en las próximas semanas comiencen a registrarse eventos de conflictividad social o de criminalidad en la medida en que las actividades económicas de la zona permanecen suspendidas. En este sentido, en el corto a largo plazo, se vislumbran los siguientes escenarios:

- De riesgo sanitario en el corto plazo; pues existe el riesgo de que las inundaciones y la ausencia de acceso a agua potable genere brotes de enfermedades gastrointestinales o respiratorias, u otras (tras el huracán Patricia hubo aumentos de Chikungunya, por ejemplo). Por este motivo, reactivar el servicio de agua y acceso a servicios médicos debiese ser una de las prioridades.
- De vandalismo o saqueos —que ya comenzaron a presentarse—, pues personas buscan alimentos y víveres para hacer frente a la tragedia sin que haya canales legales para hacerse de ellos. Este riesgo se acrecentará conforme pasa el tiempo y el gobierno no consigue entregar suficientes víveres a la población o restaurar servicios básicos.
- De manifestaciones e, inclusive, de protestas violentas, por falta de servicios en zonas afectadas por el huracán Otis (energía eléctrica, telecomunicaciones u otros servicios públicos indispensables como el abasto de agua potable). Es probable que éstos se

manifiesten en instalaciones de gobierno como el Ayuntamiento o delegaciones de instituciones federales en el municipio.

- De construcción de bases sociales por parte de grupos criminales, que seguramente entregarán despensas o víveres a damnificados con miras a ganarse su tolerancia (ésta es una práctica normal entre organizaciones criminales). Los grupos criminales de mayor riesgo en Acapulco son el Cártel del Sur; el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA); el Cártel Jalisco Nueva Generación; o La Nueva Familia Michoacana, entre otros; mientras que las colonias de alto riesgo son las de mayor vulnerabilidad como la colonia Renacimiento.
- De riesgos materiales en el corto a mediano plazo, por la existencia de construcciones que resultaron dañadas y que podrían derrumbarse e, inclusive, herir a personas.
- En el mediano a largo plazo, riesgos derivados por la reducción en la derrama económica tras disminuir el número de visitantes turistas —Acapulco y otros municipios colindantes dependen del turismo como principal fuente de ingreso.

Por último, destaca la tardía respuesta de autoridades estatales y municipales para atender la situación de crisis. Si bien es cierto que el estado y sus municipios no cuentan con recursos suficientes o capacidad para atender de forma integral a todos los damnificados, en realidad éstas han decidido depender desproporcionadamente de las autoridades federales (es poco probable que otros gobernadores hubiesen decidido relegar toda la responsabilidad).

Un último riesgo consiste en la posibilidad de que los recursos, despensas o víveres que sean enviados a los guerrerenses sean malversados. En este sentido, en el pasado se identificaron casos en el que estos envíos concluyeron en posesión de grupos criminales o de políticos que buscaban reeditar de la tragedia.

- Si bien el presidente López Obrador señaló que señaló que los apoyos serían entregados de forma directa para evitar corrupción; este formato de entrega suele ser el más propicio para que ocurra (hay poca transparencia o control) o, al menos, que sea utilizado con fines de proselitismo político.



## Ejecutan a secretario de seguridad pública municipal junto con operador y 11 policías en Coyuca de Benítez, Guerrero; la inseguridad en este municipio y el estado es cada vez mayor

### RIESGO DE SEGURIDAD

El pasado 23 de octubre ocurrió una emboscada contra 13 policías en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, en la comunidad de El Papayo, cerca de la cabecera municipal de Coyuca de Benítez. Entre los atacados se encontraba el secretario de seguridad pública municipal, Alfredo Alonso López junto con el director de la Policía Preventiva, Honorio Salinas Garay. Esto sucedió después de que una llamada anónima alertara el supuesto plagio de



dos elementos de la dependencia. Es probable que la llamada fuera una trampa para poder realizar el ataque, ya que el grupo de policías fue atacado por alrededor de 30 personas que los esperaban en el sitio con armas de alto calibre. A pesar de que llegó un grupo de seis policías más para apoyar a sus compañeros en la balacera, estos fueron interceptados. Sus cuerpos fueron hallados más tarde con signos de tortura.

- Este *modus operandi* en el que las emboscadas por parte de grupos criminales o trampas contra autoridades inician con una llamada anónima que es utilizada como “gancho” se ha vuelto cada vez más común. Uno de los casos más recientes es el de explosivos en Tlajomulco contra elementos de la Fiscalía del Estado en julio de este año. Y aunque diversos grupos recurren a esta forma de operar, una de las organizaciones que más lo hace es el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Después del evento, que causó la preocupación e indignación entre habitantes del municipio e incluso a nivel nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su pesar e informó del despliegue de 300 elementos de la Guardia Nacional en el municipio, así como patrullajes de policías, marinos y soldados. Por su parte, el alcalde morenista, Ossiel Pacheco Salas, quien detenta el cargo desde el 2021, solicitó las investigaciones de la Fiscalía del Estado. El vicefiscal, Gabriel Hernández, anunció, sin dar detalles, que hay dos líneas de investigación y señaló que no había registro de amenazas contra servidores públicos, con lo que coincidió el alcalde.

A pesar de la falta de amenazas mencionada, este es solo uno más de los múltiples ataques que ha habido contra autoridades y en particular contra secretarios de seguridad del municipio.

- El 19 de junio del 2022 fue asesinado, también en una emboscada, Ramón Soto Gatica, quien había sido director de seguridad pública del municipio de febrero a junio de ese año, cuando renunció para integrarse al grupo de escoltas del alcalde.
- En diciembre del 2022 hubo otra emboscada, también en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, dirigida contra el entonces secretario de seguridad pública municipal, David Borja Padilla, quien resultó herido. Renunció al cargo unas semanas después, en enero de este año. Cabe mencionar que el ataque ocurrió en el marco de descontento al interior de la secretaría por el deterioro de las condiciones laborales. Si bien podrían ser eventos independientes, es importante destacar el contexto.
- Una ola de violencia ha afectado al municipio en general, que, de acuerdo con fuentes abiertas, ya es el séptimo con más homicidios dolosos en el país (casi 1300 entre enero y septiembre de este año). También en enero se registró el asesinato de un exdirigente del Partido Revolucionario Institucional, Salvador Quinto Nava.

La violencia contra autoridades no se limita a Coyuca de Benítez.

- En abril 11 alcaldes del estado de Guerrero enviaron una carta a la gobernadora, Evelyn Salgado solicitando apoyo frente a las amenazas del crimen organizado; y en mayo se

registró la ejecución de un regidor morenista, también de Coyuca, Aurelio Terán Alvarado.

- En julio, en el marco de una reunión entre un presunto líder de Los Ardillos, Celso Ortega y la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, hubo protestas en Chilpancingo de aproximadamente 3 mil personas por la detención de líderes transportistas asociados con este grupo criminal.
- En septiembre fueron asesinados en eventos separados (11 y 12 del mes) el fiscal regional en Tierra Caliente, Víctor Salas, quien era militar, en Coyuca de Catalán; y el jefe de la Fiscalía Federal en Guerrero, Fernando García, en Chilpancingo.

Si bien algunos de estos eventos ocurrieron en diferentes regiones, se enmarcan en el conflicto entre diferentes organizaciones por rutas de trasiego y mercados de droga. Uno de esos conflictos es entre Los Ardillos y Los Tlacos, que habían tenido una paz duradera desde 2021 hasta mayo del 2022, cuando un líder transportista afín a Los Tlacos fue asesinado.

Hasta ahora ningún grupo se ha adjudicado la autoría de la emboscada de policías en Coyuca de Benítez y tampoco hay señalamientos por parte de autoridades al respecto. El asesinato de Víctor Salas, el fiscal regional de Tierra Caliente, en Coyuca de Catalán, ya no en la costa sino más al noroeste, colindante con Michoacán, podría arrojar una pista ya que se acusó directamente a La Nueva Familia Michoacana de perpetrar el ataque. Cabe mencionar que esta organización también tiene presencia en Acapulco, municipio colindante con Chilpancingo y Coyuca de Benítez y que se ha registrado su avance e interés en toda la Costa Grande de Guerrero. Sin embargo, la dinámica en Coyuca de Catalán y Coyuca de Benítez es muy distinta, por lo que podría no haber relación entre ambos eventos.

Otra posibilidad es que se trate de un intento de cooptación del alcalde por parte de Los Ardillos en su guerra con Los Tlacos o viceversa, pues llama la atención que, después de los reiterados ataques contra secretarios de seguridad pública del municipio, no haya habido ningún intento dirigido contra el alcalde, lo cual podría significar que el objetivo es amedrentarlo para negociar con él, posiblemente, el nombramiento de algún personaje afín en esta secretaría.

Con el desastre natural causado por el huracán "Otis", existe la posibilidad de que la dinámica criminal cambie, ya sea porque las organizaciones pierdan interés en las regiones afectadas para concentrarse en otras, como en el norte del estado, o porque aprovechen la situación para asegurar su control a futuro. Cabe mencionar que dos de los municipios más afectados son precisamente Acapulco y Coyuca de Benítez, donde una de las organizaciones predominantes hasta el momento había sido el CJNG, en guerra con la Nueva Familia Michoacana. Consideramos que el escenario más probable es el segundo, es decir, en el que organizaciones criminales, entre ellas La Nueva Familia Michoacana, el CJNG, el Cártel del Sur, entre otras, entreguen despensas y víveres con el propósito de construir bases sociales en la región.



## Cártel de Sinaloa exhibe colusión de policías de Jalisco con el CJNG para frenar su avance en Los Altos

### INSTITUCIONES DE SEGURIDAD

La prolongada disputa entre el Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) adquirió un nuevo giro esta semana. Sucedió que el pasado 25 de octubre comenzaron a circular en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, una serie de volantes con mensajes en donde se confirmó la presencia del CDS en Los Altos, así como su interés por continuar disputándole al CJNG el control de la región. Los mensajes estaban dirigidos a la población local, pero también a la policía municipal y a las autoridades del estado. En un tono amenazante contra el gobernador Enrique Alfaro, en los volantes se enlistan los nombres de policías que supuestamente se encuentran coludidos y en la nómina del CJNG. Se demandó al gobernador de Jalisco que dejase de enviar refuerzos de policías estatales a municipios como Teocaltiche, Lagos de Moreno y Encarnación Díaz. Según lo que refieren estos comunicados, el incremento de los policías en la región obedece al propósito de “limpiar el paso” para que el CJNG pueda prosperar sin tener que enfrentarse en solitario al CDS.

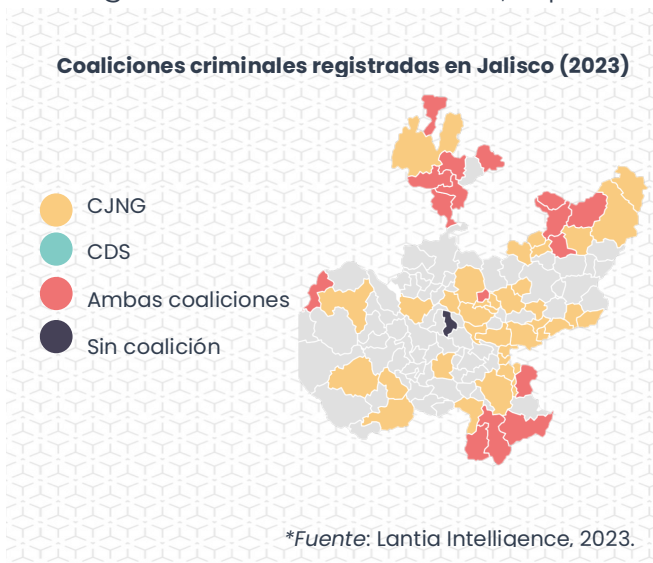
El CDS pidió a las autoridades del estado que cesen su intervención en favor del CJNG; además, exhortó al gobierno de Alfaro para que no se inmiscuyese en un conflicto que no le concierne y que no está orientado a causar daños a elementos de seguridad ni a la población civil. Pero junto a la “petición” hubo una amenaza: si continúan sumándose a los esfuerzos del CJNG para frenar la expansión territorial del CDS, estos últimos podrían reconsiderar su estrategia de confrontación con el gobierno. El Cártel de Sinaloa, según señalan los boletines, tiene la capacidad para enfrentar tanto a las fuerzas del CJNG como a las fuerzas del Estado, y si hasta ahora no lo ha hecho es porque no quiere reñir con la policía estatal, municipal, Guardia Nacional y el Ejército.

En los volantes del CDS también se exhortó a las policías municipales de Lagos de Moreno para no dejarse intimidar por el CJNG ni por el comandante Isaías Domínguez Ortiz, ex comisionario de la policía de Guadalajara, supuestamente también en la nómina del cártel. Los mensajes son, por lo tanto, un doble guiño: el CDS busca, por un lado, ganarse el apoyo de las fuerzas municipales, actualmente capturadas por sus principales rivales, y por el otro, denunciar las redes de colusión y de cooptación del CJNG, que se extienden por todo Jalisco, incluyendo la capital del estado. Además de compartir la lista de nombres de los policías coludidos, el CDS exhibió las cantidades monetarias que les ofrece el CJNG a cambio de su cooperación. En el caso del escuadrón motorizado “Jaguares” de Zapopan, se afirma en los volantes que a cada uno de los 20 agentes municipales enlistados se le repartió dos mil 500 pesos, mas no se especificó si fue un monto de pago único o si es un salario recurrente.



Aunque la organización dominante en Jalisco sigue siendo el CJNG, la expansión del Cártel de Sinaloa es notable desde hace meses. En Lantia Intelligence tenemos registrada la presencia del CDS en 16 municipios del estado. En la región de los Altos de Jalisco, específicamente en Encarnación de Díaz, Teocaltiche, Villa Hidalgo y Ojuelos, el presunto jefe de plaza del CDS es Mario González Martínez (a) “El Flama”, quien es cercano a Iván Archivaldo Guzmán, uno de los dirigentes de la facción de Los Chapitos. Junto a su hermano Ramón González, “El Flama” ha logrado instaurar una facción local del CDS en Los Altos. Esto gracias al apoyo que también recibe de Los Zambada desde territorios contiguos en Aguascalientes y Zacatecas. Sin embargo, allí donde el CDS busca consolidar su presencia, el CJNG también redobla esfuerzos para evitar su desplazamiento territorial, por lo que en la actualidad no tenemos registro de un solo municipio de Jalisco que pertenezca por completo al Cártel de Sinaloa, y sí de varios que se encuentran en disputa por las dos coaliciones criminales.

Si las acusaciones del CDS son ciertas, entonces los eventos de esta semana brindan un elemento adicional para entender cómo el CJNG se ha enraizado en las instituciones de seguridad de Jalisco y ha cooptado a sus elementos para facilitar sus negocios criminales. Más aún, este hecho expone cómo las fuerzas de seguridad del estado participan en algún grado en la aplicación discrecional de la ley en favor de una organización: el CJNG. Desde principios de la actual administración se ha hablado de cómo el gobierno de Jalisco formuló una estrategia de seguridad pragmática orientada a la disuasión del CJNG: a cambio de que el CJNG no efectuase delitos de alto impacto con repercusiones para la población civil, las autoridades estatales mostraron un mayor grado de tolerancia hacia el desempeño de sus actividades económicas ilícitas. A lo anterior se suman las filtraciones de Guacamaya Leaks del año pasado, en las que se reveló cómo la SEDENA vigilaba posibles vínculos entre altos mandos de seguridad del estado y el CJNG. Así pues, a un año de las elecciones de 2024 en las que se renovará la gubernatura de Jalisco, está por verse si la incursión y presión externa de organizaciones como el Cártel de Sinaloa alterarán la distribución de poder en el estado, la relación política tradicional entre el CJNG y el gobierno, y, por encima de todo, la estrategia de seguridad para enfrentar a organizaciones que compiten por la hegemonía criminal en Jalisco.





## Nueva alianza entre Los González y Los Tepeacas aumenta la violencia en Puebla tras la disputa que mantienen con “La Barredora” y CJNG.

### DINÁMICA CRIMINAL

A pesar del anuncio por parte de autoridades federales sobre mayor vigilancia en la entidad poblana, los delitos se intensifican. Esta semana se registraron dos masacres y el asesinato de dos personas en la zona metropolitana con un saldo de más de 10 muertos en dos días, lo que encendió las alertas de seguridad. El 23 de octubre, un comando armado a bordo de camionetas estilo patrulla, atacó un picadero (inmueble donde se vende y consume droga) a unos metros de la plaza principal de la junta auxiliar de San Miguel Canoa, con un saldo de siete muertos y un herido. Medios informativos apuntan a que el crimen fue perpetrado por el grupo de Los González, en represalia por el asesinato de tres personas en el municipio de Amozoc los días 9 y 19 de octubre.

La banda de Los González fue identificada por las autoridades poblanas al menos desde el 2020, cuando tres personas fueron detenidas con una camioneta robada y declararon que el grupo se dedica al robo y venta de automóviles de lujo. Meses después, otras dos personas también de esta banda, fueron aprehendidas con cristal y marihuana que pretendían vender en la zona de Amozoc. A Los González se les relaciona con otros delitos como el fraude, el tráfico de armas y el robo de gas. Versiones no oficiales indican que el grupo tiene casas de seguridad en los municipios de Acajete y Amozoc, ambos de importancia para el trasiego de drogas y mercancías ilícitas por estar ubicados en vías carreteras importantes como la 150 y 150 D que llevan hacia Córdoba, Veracruz, y la 129 que dirige hacia el noreste de la entidad y conecta con los estados de Veracruz y Tlaxcala.

A pesar de que esta banda ya estaba identificada al igual que el picadero en San Miguel Canoa, donde se han realizado operativos desde hace al menos siete años (la última vez fue el 14 de julio), ni autoridades municipales, estatales o federales lograron alguna captura o clausurar las actividades ilícitas del lugar. El secretario de Gobernación estatal, Javier Aquino Limón, indicó que el presidente auxiliar de Canoa, Paciano Ruperto Pérez Lima, había pedido varias veces el apoyo del gobernador Sergio Salomón Céspedes, debido al incremento de la delincuencia en la zona. Asimismo, aseveró que hay un alto índice de criminalidad en el área que colinda con Tlaxcala, sobre todo en las localidades contiguas, como San Miguel Canoa y La Resurrección. No obstante, exhortó a los ayuntamientos a responsabilizarse de la seguridad en sus demarcaciones e integrarse a las estrategias de seguridad del gobierno estatal.

Por su parte, el titular de la secretaria de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna, dijo que la existencia de estos lugares (picaderos), se debe también a la omisión de la ciudadanía para colaborar con las autoridades, porque durante los operativos, los vecinos se niegan a señalar los lugares y/o a los delincuentes. El mismo día 23, se encontraron dos cuerpos maniatados y con huellas de violencia cerca de la carretera a Valsequillo en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán. Los cadáveres estaban acompañados de cartulinas amenazantes cuyos mensajes no fueron difundidos, pero hacían alusión a la venta de droga.

El 25 de octubre se encontraron diez bolsas con restos humanos cerca del panteón de Chachapa en Amozoc. Durante los primeros reportes, fuentes locales mencionaron al menos ocho cuerpos desmembrados, sin embargo, en una conferencia de prensa el día 26, el fiscal del estado, Gilberto Higuera Bernal, dijo que se trataba de cuatro personas aún no identificadas. Junto a las bolsas se encontraron mensajes de advertencia donde se acusaba a las víctimas de traidores y estaban presuntamente firmados por los grupos Los González y Los Tepeacas, quienes supuestamente habrían formado una alianza para enfrentar a sus enemigos.

En agosto, el líder de Los Tepeacas, Jesús Elías Cisneros Jiménez (a) “El Terreno”, fue asesinado por un comando armado en su domicilio en Santa María Xonacatepec. Este grupo se dedica principalmente al robo del gas LP y asaltos a transporte de carga en la zona que abarca desde Tepeaca hasta Texmelucan. El cuñado de “El Terreno”, conocido como “El Platanito”, fue privado de la libertad y su cuerpo apareció en septiembre junto a una cartulina que advertía que “lo mismo le va a pasar a los que roban vehículos, y rateros en general, que principalmente operan en Tepeaca y Amozoc”, y estaba firmado por Operativa Barredora.

La Operativa Barredora surgió en febrero como una amenaza del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra bandas delictivas que operaban en el estado y que incluso usaban sus siglas para delinquir, por lo que el cartel pidió a las autoridades no intervenir en la “limpia” que realizarían en la entidad. Los Tepeacas no habían sido nombrados dentro de sus amenazas, pero uno de sus aliados, Hilario P. (a) “El Guitarras”, fue mencionado en un video publicado ese mismo mes.

En Puebla, el CJNG tiene una alianza con Sangre Nueva Zeta que se extiende hacia el estado de Veracruz, por lo que las carreteras hacia esta entidad son de gran importancia para sus actividades. El CJNG mantiene pugnas con otros grupos locales como Los Tepeacas y Los González para conservar el control de la zona: es altamente posible una alianza entre estos dos grupos con el propósito de hacerle frente a la Operativa Barredora, y una de sus estrategias podría ser el ataque a narcomenudistas que pertenecen al CJNG.

La cercanía temporal de los asesinatos, así como la similitud de los mensajes encontrados, muestran la posibilidad de que los tres hechos fueran perpetrados por Los Tepeacas y Los González. Aunque el fiscal Higuera Bernal indicó que todavía no podían atribuir estos crímenes a un grupo delincuencial en específico. Sin embargo, confirmó que estos asesinatos responden a las pugnas de diferentes grupos delincuenciales en Puebla y entidades vecinas, y que una de las líneas de investigación para el caso del picadero de San Miguel Canoa era la captación de personas adictas para convertirlas en narcomenudistas. Hipótesis poco probable, ya que al menos tres de las víctimas se dedicaban a la venta de droga.

El fiscal no confirmó si dicho picadero forma parte del CJNG o algún otro grupo e indicó que cada una de estas masacres será investigada individualmente, porque aún no se puede asegurar si los asesinatos responden a pugnas entre narcotraficantes o grupos dedicados al ro-

bo de transporte y combustible. Aunque existen antecedentes que el CJNG, Los González y Los Tepeaca se dedican a los tres delitos en la región. En el caso del picadero, destaca que el lugar haya permanecido en completa impunidad desde la primera vez que fue denunciado en 2016, lo que indica omisión de las autoridades o protección a algún grupo delincuencia. Si fuera cierta la teoría de que los atacantes fueron Los González, y que su objetivo era captar narcomenudistas, el lugar podría pertenecer al CJNG o a sus aliados.

Las aseveraciones de las autoridades estatales demuestran que estas poblaciones, aunque forman parte de la zona metropolitana, permanecen en el abandono. Los delincuentes han tenido la libertad de pelear por la extensión de sus territorios con impunidad. Amozoc ha sido una zona en la que constantemente se llevan a cabo actos delictivos como el robo de mercancía y combustible que se transporta entre Veracruz y Puebla. Por otra parte, ninguna autoridad ha tomado responsabilidad sobre la operación de los picaderos en el estado; al contrario, tratan de culpar a administraciones pasadas e incluso a la población que sufre indefensa las actividades de los grupos criminales.

Por todo lo anterior, no se espera que la situación mejore en el corto plazo: estos grupos seguirán con sus actividades ilícitas, así como participando en ataques y enfrentamientos que ponen en riesgo a la población. Hasta el momento, la Coparmex de Puebla externó su preocupación, y por medio de su presidente Rubén Furlong, hizo un llamado a los gobiernos estatal y municipal para actuar con firmeza. Asimismo, pidió que el trabajo de los funcionarios públicos, incluida la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, María del Consuelo Cruz Galindo, y el secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna, sean evaluados.



## Detienen a ahijada del fiscal general de Quintana Roo, líder de los Chiapanecos, con cocaína en Polanco

### DINÁMICA CRIMINAL

Con la detención de una ahijada del actual fiscal general de Quintana Roo, Carmen Fabiola Pérez, el pasado 17 de octubre, se confirma la operación de una red criminal de distribución de cocaína en varios puntos de la región sur del país. Esto ocurrió en la alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX cuando agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad la detuvieron en una camioneta junto a otros dos sujetos; los dos otros hombres eran Enrique del Carmen Cruz, subdirector de una clínica de tratamiento de adicciones en Chiapas llamada "Comunidad Terapéutica Rehadic A.C." y Manuel Moreno. En el lugar, Fabiola Pérez afirmó tener vínculos con altos funcionarios de la fiscalía de Chiapas, incluyendo ser ahijada del exfiscal Raciél López Salazar y cercana al actual fiscal, Olaf Gómez Hernández.

Con esta detención se confirmaría la operación de una red criminal de narcomenudeo desplegada en varios puntos del sur del territorio dedicada a la distribución de cocaína. No es el primer caso de detenciones de personas cercanas a Raciél López Salazar. Este último es el actual fiscal general de Quintana Roo desde junio pasado debido a la renuncia de Óscar

Montes de Oca. Esta designación ha incitado críticas contra la gobernadora Mara Lezama debido a los claros antecedentes criminales de López Salazar.

Raciel López Salazar es acusado de liderar una agrupación criminal de distribución de drogas conocida como Los Chiapanecos. En 2021 fue nombrado secretario de seguridad ciudadana de Puebla bajo la administración de Miguel Barbosa. Sin embargo, este último lo acusó de ser un líder criminal y lo destituyó por presuntamente tomar control de la policía estatal para operaciones criminales. En sus tiempos como fiscal general de Chiapas, fue señalado de adquirir propiedades y de enriquecerse de manera desmedida. Recientemente se le ha acusado de operar casas de cambio en Quintana Roo a través de un operador llamado Luis Sánchez y de recibir 15 millones de dólares por la liberación de un narcotraficante de Tulum.

Más importante es que López Salazar es un presunto colaborador del grupo criminal Los Pelones con presencia en Poza Rica, Veracruz. Esta agrupación yace en conflicto con el CJNG en la región norte de este estado. Destacamos su fuerte vinculación con gobiernos municipales y sus esfuerzos por contender con candidatos que también tienen posiciones criminales. De modo que se trata de una red criminal incrustada en gobiernos y fiscalías locales con consolidada presencia en una extensión considerable del territorio.

Advertimos que es probable que este tipo de noticias le implicará críticas a la actual gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, por la vinculación de su fiscal con el crimen organizado. Adicionalmente, podría darse una ola de violencia a nivel local en varios municipios del estado con miras a la elección de 2024 (11 municipios y 35 diputaciones federales).

Por otro lado, los habitantes y autoridades de Frontera Corozal, en el municipio de Ocosingo, Chiapas, están solicitando la presencia permanente de la Guardia Nacional para hacer frente a la actividad de un grupo delictivo en la zona lacandona; exigen al gobierno federal medidas inmediatas para prevenir asesinatos, desapariciones y secuestros. Desde el 11 de octubre, la población de Frontera Corozal ha estado manifestándose debido a la inseguridad generada por estos grupos delictivos, en particular por el Cártel de Sinaloa. Existe la sospecha de que elementos de la Policía Estatal de Chiapas asignados en la zona lacandona podrían tener vínculos con la delincuencia organizada. Se ha detenido a ocho policías estatales y más de 20 pobladores por su presunta participación en actividades ilícitas.



Uno de cada dos policías ejecutados en México es municipal y cuatro de cada 10 policías heridos son estatales, mientras que uno de cada tres policías que han sido víctimas del crimen organizado es de Guanajuato, Michoacán o Guerrero

ANÁLISIS LANTIA INTELLIGENCE

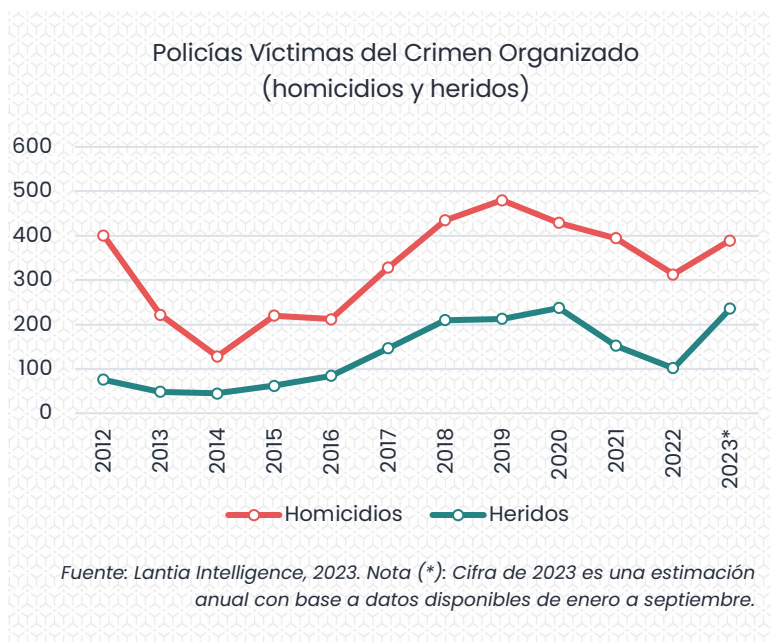
Lantia Intelligence presenta un análisis de los elementos activos de la fuerza de seguridad, tales como militares y policías, que han sido víctimas (homicidios y heridos) del crimen



organizado debido a enfrentamientos o agresiones directas. Los principales hallazgos muestran lo siguiente:

- De enero de 2012 a septiembre de 2023 se han registrado 3,854 elementos de seguridad víctimas de homicidio y 1,552 heridos. El 49.5% de los militares y policías víctimas de homicidio y 56.8% de los elementos heridos han sido durante la actual administración federal (enero de 2019 a septiembre de 2023).
- En 2019 se registró el mayor nivel de homicidios de elementos de fuerzas de seguridad en los últimos 12 años con 480. Se han registrado disminuciones del 10.6% en 2020, del 8.2% en 2021, y del 20.6% en 2022, sin embargo, se estima que 2023 finalizará con un aumento del 24.4%.
- De 2012 a 2023, el año con el mayor número de fuerzas de seguridad que han resultado heridos es 2020 con 237, aunque en 2021 se muestra una disminución del 35.9% y en 2022 del 32.9%. No obstante, para final de 2023 se estima un aumento del 131.4%.
- De enero de 2019 a septiembre de 2023 se registraron 2,352 elementos de las fuerzas de seguridad que han víctimas de homicidio (1,471, es decir, 62.5%) y lesiones (881, lo que implica el 37.5%).

- De las fuerzas de seguridad que han sido víctimas de homicidio, el 49.9% son municipales, el 34.5% son estatales, el 6.7% federales, y el 8.8% militares.
- De las fuerzas de seguridad que han resultado con lesiones o heridas, el 28.8% son municipales, el 39.4% son estatales, el 18.4% son federales, y el 13.4% son militares.



- El 60.1% de los elementos de seguridad que han sido víctimas de homicidio y lesiones por parte del crimen organizado se concentra en ocho entidades: Guanajuato (11.9%), Michoacán (9.9%), Guerrero (8.2%), Zacatecas (6.6%), Chihuahua (6.5%), Sonora (6.2%), Jalisco (5.5%), y Estado de México (5.4%).



- Los estados con el menor número de víctimas (menos del 3.2% en conjunto) son Aguascalientes (0.3%), Baja California Sur (0.2%), Campeche (0.1%), Durango (0.8%), Hidalgo (0.6%), Nayarit (0.4%), Querétaro (0.7%), Tlaxcala (0.1%), y Yucatán (0.1%).

Fuerza de Seguridad Pública Activa Víctima del Crimen Organizado (enero de 2019 a septiembre de 2023)				
Estado	Homicidios	Heridos	Total	%
Aguascalientes	6	1	7	0.3
Baja California	71	34	105	3.8
Baja California Sur	3	3	6	0.2
Campeche	2	1	3	0.1
Coahuila	14	25	39	1.4
Colima	41	10	51	1.8
Chiapas	23	6	29	1.0
Chihuahua	126	54	180	6.5
CDMX	43	12	55	2.0
Durango	12	9	21	0.8
Guanajuato	244	89	333	11.9
Guerrero	179	51	230	8.2
Hidalgo	8	8	16	0.6
Jalisco	98	55	153	5.5
México	115	36	151	5.4
Michoacán	160	115	275	9.9
Morelos	48	20	68	2.4
Nayarit	7	3	10	0.4
Nuevo León	36	31	67	2.4
Oaxaca	60	19	79	2.8
Puebla	57	40	97	3.5
Querétaro	15	4	19	0.7
Quintana Roo	32	12	44	1.6
San Luis Potosí	43	25	68	2.4
Sinaloa	37	42	79	2.8
Sonora	116	56	172	6.2
Tabasco	32	4	36	1.3

Fuerza de Seguridad Pública Activa Víctima del Crimen Organizado <b>(enero de 2019 a septiembre de 2023)</b>				
Estado	Homicidios	Heridos	Total	%
Tamaulipas	40	38	78	2.8
Tlaxcala	4	0	4	0.1
Veracruz	96	31	127	4.6
Yucatán	4	0	4	0.1
Zacatecas	136	47	183	6.6
<b>Total</b>	<b>1,908</b>	<b>881</b>	<b>2,789</b>	

*Fuente: Lantia Intelligence, 2023.*